DOS MINUTOS DE DOCTRINA

11 de agosto de 2015

CAMINA PERO NO COME

*Los jueces se ven obligados, a veces, a resolver cuestiones extrañas.
Pero una de las funciones de la justicia es mantener la paz social.
Y ello exige ingenio.*

Ana trabajaba como empleada administrativa en una gran empresa. A los tres meses de haber ingresado a su empleo, al subir o bajar las escaleras del edificio donde llevaba adelante sus tareas se tropezó y dio por tierra con toda su noble humanidad, con tanta mala suerte que no logró atajar el golpe ni protegerse con las manos. Su cabeza golpeó fuertemente contra el piso. Se lastimó la cara, la boca y los dientes, con tanta mala suerte que perdió uno de los incisivos superiores.

En otras palabras, sufrió un accidente de trabajo, y la ley ordena al empleador hacerse cargo de las consecuencias. La ley también establece que los empleados estén amparados por un seguro obligatorio (pagado por el empleador) que los proteja de los riesgos del trabajo.

Ana fue atendida correctamente por la empresa aseguradora, que cubrió los gastos derivados de su caída escaleras abajo y que le impedían volver a trabajar.

Pero el incisivo faltante planteó un problema: como los dientes restantes ya tenían pernos, coronas y otros accesorios, no se podía reemplazar el ausente (cuya falta hacía que las pocas veces que Ana

sonreía su expresión tuviera algo de perturbador), hubo que sustituir todas las piezas dentarias superiores y colocarle una prótesis.

Como Ana entendió que la reparación de todas las dolencias causadas por su estrepitosa caída (incluyendo las derivadas del daño sufrido por su aparato masticatorio) no fueron adecuadamente indemnizadas, se presentó ante la justicia para reclamar una reparación integral.

En primera instancia, el juez rechazó la demanda. Tanto Ana como la aseguradora apelaron.

La Cámara¹ analizó primero si correspondía indemnizar a Ana por la eventual incapacidad producida por su desafío a la ley de gravedad. Pero los jueces no encontraron ningún elemento que probara que a Ana le hubiera quedado alguna secuela de incapacidad como consecuencia de la caída. En palabras del tribunal, “la demandante no logró demostrar la incapacidad laborativa que afirmaba padecer”. Es decir, estaba curada.

---

¹ In re A.K.V. c. Provincia ART, CNTrab. (I), 2015; LL 6 agosto 2015: AR/JUR/24336/2015

Los jueces dejaron en claro que no se discutía si Ana había sufrido o no un accidente, sino si éste había dejado secuelas que le produjeran alguna incapacidad y si, en consecuencia, debía ser indemnizada. Y la respuesta fue negativa.

Más aún: los jueces destacaron que las roturas de dientes no producen incapacidades laborales que sea menester indemnizar. El médico odontólogo que la revisó dijo que Ana no tenía incapacidad laboral alguna, y ninguno de los baremos consultados (es decir, las tablas que fijan las indemnizaciones según la magnitud de las lesiones que puede sufrir una persona) asigna alguna incapacidad en caso de rotura o pérdida de dientes o prótesis dentales.

Dicho de otra manera, aun desdentada, una persona puede seguir trabajando. Su falta de dientes no es una incapacidad. Quizás no pueda masticar nunca más, pero eso no tiene relevancia indemnizatoria. Parecería que en este caso las leyes incentivan, por vías indirectas, el consumo de papillas y alimentos líquidos.

La Cámara dejó en claro que la apelación de Ana “no logró precisar en forma concreta ni razonada las minusvalías que el infortunio sufrido le ocasionaba en el plano laboral, como tampoco patentizó [¡vaya verbo!] las limitaciones que sus consecuencias representan en la vida familiar y de relación”. (Sin duda, los abogados de Ana deben haber tenido algún problema de prueba, porque una persona que pierde los dientes sufre un menoscabo, al menos moral. Y si bien es cierto que las aseguradoras de riesgos del trabajo no cubren el daño moral, sino únicamente las discapacidades laborales, quizá se debió haber pensado en demandar a alguien más. ¿Alguien verificó si la escalera tenía pasamanos?).

A mayor abundamiento, la Cámara dijo que Ana “no acompañó ninguna prueba que conduzca en forma inequívoca a la detección del error o del inadecuado uso que el médico especialista ha hecho de su conocimiento científico”.

Por consiguiente, los jueces entendieron que las manifestaciones de Ana acerca de su minusvalía derivada de sus problemas dentales “eran genéricas” y “meras formulaciones dogmáticas, insuficientes a los fines pretendidos” (esto es, *para demostrar una incapacidad laboral*).

Pero el Tribunal, con un inusual espíritu de iniciativa que debe ser elogiado, decidió dar un paso positivo a favor de Ana. A pesar de que ésta no había quedado laboralmente incapacitada, los jueces entendieron que era evidente que la prótesis que se le había colocado a Ana era defectuosa y le producía una “oclusión deficiente”.

La *oclusión* no es concepto jurídico: es el contacto que hacen los dientes entre sí, ya sea cuando están en reposo como cuando trabajan en la masticación. La oclusión no toma en cuenta solamente los dientes, sino todos los elementos del aparato masticatorio: las mandíbulas, las articulaciones, los músculos de la masticación y del cuello, etc. Dicho en lenguaje fácil, “Ana mordía mal”.

Para avanzar en este sentido, los jueces aplicaron el principio “*iuria novit curia*”, un clásico brocardo (una de esas frases en latín que los abogados solemos decir de tanto en tanto para impresionar a los legos y lograr que no nos entiendan pero que resumen en pocas palabras reglas muy claras). Según ese principio, “los jueces conocen el derecho”, por lo que están obligados a juzgar y a no dejar cuestiones sin resolver. (En este sentido, el brocardo

en cuestión se opone y evita la aplicación de otro que se usaba en el derecho medieval —“*non liquet*”— que literalmente quiere decir “no sé” y que permitía a los jueces lavarse las manos).

Sobre la base, entonces, de que “los jueces conocen el derecho”, el tribunal reconoció que, si bien Ana no sufría ninguna incapacidad, tenía una prótesis mal colocada y defectuosa.

Entonces ordenó a la empresa aseguradora no a pagar a Ana una suma de dinero, sino a rehacer la prótesis dentaria y colocarla adecuadamente para “que le permita cumplir adecuadamente las funciones masticatorias”. El tribunal creó algo así

como un “derecho a masticar” que las normas no contemplaban.

Esta tarea judicial no es común. Muchas veces los jueces “son mezquinos” en la administración de justicia. En este caso mostraron una notable propensión a resolver de raíz un conflicto que, de haber quedado irresuelto, habría afectado la imagen y la efectividad de la justicia, a la que tantas veces se la acusa de estar alejada de las reales necesidades de los justiciables.

Como el tribunal entendió que Ana pudo considerarse con derecho a litigar, en función del accidente sufrido y la naturaleza jurídica de las cuestiones en debate, las costas fueron distribuidas entre ambas partes.

* * *

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a np@negri.com.ar.

**Este artículo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.**